

¿No será pecado aguantar que decidan de una vez derramar?.

Manuel Martínez y Tomás Pieroni.

Cita:

Manuel Martínez y Tomás Pieroni (2019). *¿No será pecado aguantar que decidan de una vez derramar?.* XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-023/106>

¿No será pecado aguantar que decidan de una vez derramar?

Neoliberalismo(s), Estado y Economía Popular

MARTÍNEZ SANTACROCE, Manuel – Lic. en Ciencia Política UNVM
PIERONI, Tomás – Lic. en Sociología UNVM

Eje 2: Economía, trabajo

Mesa 29: Debates en torno a la economía popular: resistencias, conquistas y nuevas formas de organizar el proceso de trabajo

Universidad Nacional de Villa María – Instituto Académico-Pedagógico de Ciencias Sociales

E-mail: manusantacroce@gmail.com; tomaspieroni@gmail.com

Palabras clave: economía popular – neoliberalismos – CTEP – financiarización - gubernamentalidad

Introducción

La economía popular en Argentina refiere a la porción de la población excluida del mercado laboral formal. Es significativa desde principios de la década de los 90', cuando surgió el concepto de "desempleo estructural" para nombrar a ese 25 o 30 por ciento de la PEA excluida, cuando el mercado laboral argentino se "latinoamericanizaba" (Jozami, 1985). Sin embargo, la forma primigenia de nombrar a la población desempleada cambiaría de signo a partir de la difusión del método y la identidad piquetera a mediados de década. Más allá de lo nominal, la persistencia de dicha población durante el kirchnerismo en un contexto sensiblemente diferente y la creciente organización de sus unidades productivas en movimientos populares, generaron las condiciones para una vinculación orgánica en una novedosa herramienta político-reivindicativa: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular¹.

En este trabajo, buscaremos comenzar delineando una definición compleja de "neoliberalismo", es decir, que incorpore gramáticas diversas desde donde abordar la especificidad de la economía popular argentina en sus múltiples aspectos. Luego, realizaremos un recorrido sistemático por lo que denominamos "trayectoria identitaria" de la economía popular, esto es, un acercamiento político a las representaciones de sentido que atravesaron a la población en cuestión y que performan los modelos organizativos y representativos que fueron gestando.

La teoría de la hegemonía de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau sirve como guía en este punto, asumiendo el carácter "esencialmente" dislocado de todo sistema de significación y, al mismo tiempo, la existencia de significantes que ocupan precariamente el rol vicario habilitante de la operación política por excelencia: la hegemonía. Si en esta trayectoria ubicamos la fundación de la CTEP como "punto de llegada", en el apartado subsiguiente buscaremos caracterizar al sector de la economía popular entre 2011 y la actualidad. Con ello, pretendemos identificar a posteriori las demandas de la CTEP al Estado y sus estrategias para alcanzarlas. Finalmente, en base a lo desarrollado, señalaremos algunos interrogantes presentes en la realidad actual del sector, en base a la relación entre el "neoliberalismo" y las organizaciones de la economía popular en un contexto de ajuste.

¹ A lo largo de este trabajo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular estará referenciado, en muchos casos, bajo la sigla CTEP.

Neoliberalismo(s)

La filosofía política ha sido testigo de una persistencia, en las últimas décadas, a la hora de caracterizar fenómenos diversos y globales con similitudes, pero “espinosos” a la hora de aprehenderlos teóricamente. Nos referimos a ese conjunto de prácticas, valores, instituciones o sentidos que recurrentemente se denomina como “neoliberalismo”. La persistencia de dicha categoría y su carácter múltiple (en tanto permite mostrar aspectos diversos de fenómenos a escala global), nos conducen muchas veces a aplicaciones ambiguas del término. Intentando incorporar la complejidad a la que el concepto de “neoliberalismo” refiere, buscaremos a continuación precisar tres usos posibles, a fines de acercarnos luego a la especificidad de la economía popular en Argentina en toda su riqueza.

En primer lugar, referir al uso más masivo que del concepto de “neoliberalismo” se realiza: como conjunto de políticas macro-económicas que un gobierno puede tomar, basadas en fortalecer el mercado, entendiendo a éste como el modo privilegiado para asignar recursos en una sociedad. Se desprenden de esta noción dos supuestos importantes: uno, que asume al mercado como actividad fundamentalmente “bienhechora”, operación de legitimación que Habermas rastrea de manera notable (Martínez, 2016) y que nos permite identificar la asociación implícita entre dicha forma de hacer en la economía y la idea de “justicia”; otro, que el concepto de “neoliberalismo” queda circunscripto al área de lo público. Quienes son (o no) neoliberales son los gobiernos que realizan políticas macro-económicas en el sentido propuesto, como por ejemplo: apertura indiscriminada de importaciones, leyes de flexibilización laboral, privatización de empresas estatales, disminución de las políticas sociales tendientes a la desaparición, etc. Sin embargo, la tarea de los gobiernos tiene que ver meramente con la disminución del rol del Estado, institución con la única tarea de garantizar las condiciones para el desempeño racional de la población en el mercado. Este uso es el más extendido, pero al mismo tiempo, el más cuestionado o problematizado en las últimas dos décadas de debate intelectual.

En segundo lugar, la teoría de la hegemonía nos permite pensar al neoliberalismo en otro registro, no antagónico al anterior pero sí distinto, desde una ontología diferente que habilita, mediante su uso, a mostrar aspectos novedosos del fenómeno. Esta gramática supone un corrimiento de los supuestos onto-epistémicos que fundan una teoría fundamentalmente económica como la que sustenta la conceptualización previamente explicitada. Asumiendo la imposibilidad de un acceso “transparente” a cualquier fenómeno político-social, Laclau y Mouffe proponen un abordaje

“discursivo” de la realidad. Esto es, no preguntarnos por lo que las “cosas” son, en tanto “(...) *todo objeto social viene ya imputado con significados provistos por la actividad de los sujetos en sus permanentes y continuos intentos por darle sentido al propio mundo, a través del lenguaje*” (Reynares, 2013).

La centralidad otorgada a la interpretación del sujeto sobre “todo objeto social” no conduce a los autores a un relativismo anti-fundacionalista, sino que reconocen el marco paradójico en el que cobran su sentido, siempre en un contexto específico que funciona como “sistema”. Hay un sistema que permite dotar de sentido a la realidad, que informa las interpretaciones que hacemos y, sin embargo, ese sistema no permanece siempre igual porque no tiene un centro que, apriorísticamente, detenga el juego diferencial, sino que ese espacio tiene la forma de una falta.

Como consecuencia, el orden del discurso viene dado por un sistema siempre amenazado y siempre precariamente suturado: a esa operación llaman “hegemonía”. Desde esta perspectiva, podemos pensar al neoliberalismo como un discurso hegemónico en Argentina en la década de 1990, que sobredetermina al resto de elementos del sistema de significación, ocupando ese lugar privilegiado. De este modo podemos ubicar al neoliberalismo en sus consecuencias: no pretender encontrar algo que sea “neoliberalismo” puro, sino identificar el carácter sobredeterminado de todo elemento de un sistema por ese discurso hegemónico (Daín, 2011).

Por último, una lectura del fenómeno neoliberal que cuestiona fundamentalmente los supuestos antropológicos detrás de la primera versión reseñada. Nos referimos al aporte de Foucault en su genealogía del ordo-liberalismo, cuando advierte la pretensión de sus propulsores de fomentar un ethos individualista o racionalista en sentido weberiano. Foucault defiende la idea de que, a diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo no presupone una antropología individualista del sujeto, sino que se trata de construir ese ethos acorde a dicha cosmovisión.

En este sentido, el Estado cobra una importancia central para esa tarea eminentemente político-ideológica: a diferencia de la primera conceptualización, el Estado no solo desarrolla un conjunto de políticas macro-económicas específicas sin más, sino que juega un rol ordenador de preferencias buscando diseminar un modo de hacer e interpretar el mundo particular. Esta perspectiva coincide con la genealogía que del neoliberalismo realizan Srnicek y Williams en su reciente “*Inventar el futuro*”, donde evidencian con notable claridad la centralidad del trabajo político-ideológico de los primeros promotores de esta “ideología” a escala. Desde esta perspectiva, el Estado *construye* “neoliberalismo” a partir de una gubernamentalidad específica,

buscando “(...) *extender los poderes políticos y sociales de información de la economía de mercado*” (Foucault, 2007), en un esfuerzo deliberado (esto es, artificial) por multiplicar las esferas de lo social donde prime una lógica de mercado.

Así, el conjunto de políticas macroeconómicas al cual se limitaba la definición tradicional de neoliberalismo fue verosímil a partir de un proceso político-ideológico previo, de una gubernamentalidad específica como tecnología de gobierno neoliberal. Y la economía popular, en lugar de ser concebida exclusivamente como producto de aquellas transformaciones estructurales, aparece como novedad *sintomática* de la hegemonía neoliberal. En el siguiente apartado buscaremos justificar lo aquí expuesto y extraer algunas implicancias a nuestro criterio importantes.

Una trayectoria vertiginosa

La trayectoria identitaria de la economía popular en Argentina refleja una vertiginosidad insoslayable: desde los índices cercanos al pleno empleo de los 80', al 30% estructural de empleo informal actual; desde la responsabilización personal por la condición de excluidas/os a la politización del desempleo y pronta organización *frente* a lo estatal; desde la marginalidad y pauperización de las condiciones de vida cotidianas al consumo creciente y la financiarización de los sectores populares durante el ciclo kirchnerista; y, finalmente, desde la atomización de quienes fueran expulsadas/os del mercado formal a la organización proto-sindical en la CTEP, pasando por el histórico proceso destituyente de 2001. En este apartado buscaremos registrar las condiciones que habilitaron dichos movimientos, rastreando un proceso histórico tan breve como políticamente denso.

Para poder hablar sobre la emergencia del sector, es necesario aclarar que la población estructuralmente excluida del mercado laboral formal argentino era marginal hasta finales de la década de los 80'. A diferencia del resto de los países de Latinoamérica, Argentina contaba con una tasa de desempleo similar a las de naciones europeas, orillando el pleno empleo. Como marcamos en la introducción, Argentina se “latinoamericaniza” durante el primer gobierno de Carlos Menem, esto es: la población de trabajadoras/es integradas/os al mercado laboral formal disminuiría notablemente a pesar de un crecimiento económico ostensible en sus primeros años de gestión. Cómo fue posible compatibilizar el crecimiento económico con el aumento del desempleo es una paradoja que algunos/as economistas han analizado en detalle (Rapoport, 2018). Sin

embargo, la aceptabilidad por parte de las/os propias/os trabajadoras/es de su condición de nuevas/os-excluidas/os fue, a nuestro entender, escasamente abordada. No tanto respecto de las condiciones de posibilidad para su realización, sino fundamentalmente en las implicancias materiales que dicha operación política suscitara en esta población. Veamos esto con más detalle. Nuestra hipótesis es que el gobierno menemista pudo realizar transformaciones macroeconómicas generadoras de desempleo gracias a una operación político-ideológica impulsada por el gobierno de la última dictadura cívico-militar (Martínez Santacroce, 2019). Se trata de la realización de un proyecto de nación articulado por una fantasía de plenitud coherente y sencilla en su aplicación práctica, que demostró enorme capacidad para permear las formas de ver e interpretar el mundo de la población nacional. Un discurso tendencialmente hegemónico que encontraba en la intelectualidad del último golpe cívico-militar un resorte central para su expansión. La tarea político-ideológica fue un objetivo central, como argumenta Fridman, para aquel gobierno de facto. Y, dentro de ese discurso, la construcción del *homo-economicus* como individuo “empresario de sí mismo” fue muy importante (Fridman, 2008) como “(...) *sujeto de competencia que funciona como la condición no natural para el pleno desarrollo del juego también artificial del mercado*” (Reynares, 2014).

La diferencia en la tasa de desempleo de Argentina, pasando de un 6,3% en 1990 a un 18,6% en 1995 (Cerruti, 2003) no es interpretada exclusivamente, entonces, como un producto de un conjunto de políticas macro-económicas. Creemos que la emergencia de una población excluida del mercado laboral formal es más que eso: es una novedad sintomática, justamente, de una hegemonía neoliberal. En este movimiento aparecen articulados los tres modos reseñados para concebir al neoliberalismo.

La auto-responsabilización de la población excluida por su condición de desempleados y la consecuente culpa (sufrida como fracaso individual que denotaba incapacidad para realizarse en el mercado), se enmarcan en esta tendencia hegemónica del discurso neoliberal para penetrar y dislocar sentidos establecidos. De este modo, la novedosa población desempleada se encontraría atravesada, de nacimiento, por sentidos vinculados de manera profunda a aquel discurso neoliberal que lo sobredetermina (Martínez Santacroce, 2019). Así, las consecuencias de este abordaje ubican al sector antes que como “pura resistencia” al “neoliberalismo” (producto de una lectura romántica que Gago cuestiona con insistencia en “La razón neoliberal”), como la materialidad de aquel discurso.

Politizar el desempleo: efectos político-organizativos de un movimiento contra-hegemónico

Entre el aumento inusitado del desempleo durante el primer lustro de la década de los 90' y el estallido social de diciembre de 2001, un movimiento sería central para el devenir de los sectores populares en Argentina: nos referimos al proceso de politización del desempleo que dinamizarán, desordenada y lentamente, las nacientes organizaciones de desempleados/as.

Es que la población desempleada, como dijimos, asumió desde un principio que la responsabilidad por la exclusión radicaba en las incapacidades individuales para desenvolverse en el mercado. Dicha interpretación de la exclusión, coherente con la constelación de sentidos neoliberal, garantizaría la paz social en un contexto de creciente exclusión. Sin embargo, dicha construcción sería tendencialmente cuestionada, fundamentalmente por las novedosas organizaciones de desocupados (radicadas la mayor parte de ellas en el Conurbano Bonaerense, debido a las consecuencias específicas que tuvo el modelo menemista para el territorio en particular). El desempleo se politizaría, es decir, los sentidos “neoliberales” naturalizados que eran asociados con dicho significante, referidos a la auto-responsabilización por la exclusión y la culpa que ello producía en los sujetos, serían cuestionados, ubicando ahora al Estado como institución responsable de la creciente miseria.

Este movimiento sería fundamental para un incipiente resquebrajamiento de la hegemonía menemista en Argentina. Dotaría de potencia a las organizaciones de desocupados (fortalecidas, más tarde, por la difusión del método y la identidad piquetera en un proceso centrípeto para una nación unitaria) y tendría fuertes implicancias en el proceso destituyente de 2001.

Con un gobierno peronista en el gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires (Duhalde y Ruckauf) y en muchos de sus municipios, las organizaciones de desempleados desarrollaron un creciente despliegue territorial (el movimiento desde la fábrica al barrio se explica por el surgimiento de la economía popular) ajeno a la red tradicional vinculada al Partido Justicialista. El proceso de politización del desempleo y la consecuente construcción del Estado como -otro-responsable de la exclusión colaboraron con esa distancia entre la política tradicional y las nuevas organizaciones. Fue justamente esa identificación negativa del Estado una variable sensible en la constitución identitaria del ahora movimiento piquetero.

Si pudiéramos registrar a modo fotográfico la composición ideológica del movimiento de desempleados/piquetero hacia fines de los 90', identificaríamos tres vertientes (Natalucci, 2011):

una mayoritaria vinculada a la nueva-izquierda “autonomista”, y dos minoritarias (una “movimentista” o nacional-popular y otra ligada a la izquierda tradicional/trotskista). La forma que adquirió aquella politización del desempleo fundamentaría, a nuestro criterio, dicha composición. En otras palabras: si el Estado era adversario en tanto -otro- que justificaba la condición de excluidas/os; si esa operación de politización permitió dejar atrás una interpretación neoliberal del desempleo, entonces la constitución político-ideológica del sector piquetero emergía en un contexto provechoso para interpretaciones “autonomistas” del cambio social; y esto sería fundamental, a nuestro criterio, para los sucesos de 2001.

La potencia destituyente del movimiento piquetero (fundamental, como señala Natalucci, para explicar dicho estallido social) fue la contracara de su debilidad instituyente. Es que el Estado fue identificado por buena parte de la población empobrecida como responsable de su condición de exclusión, presuponiendo el carácter a priori negativo de la lógica estatal. Dicho de otro modo: el problema no eran “las políticas neoliberales” o “los políticos que ejecutan determinadas iniciativas excluyentes”, el problema eran “los políticos” o “la política” sin más. De este modo, dentro del actor más determinante para comprender el estallido de 2001, coexistían espacios de perspectiva trotskista y nacional-populares con una variante mayoritaria que, como perspectiva estratégica, proponía la construcción de espacios autónomos del Estado, vinculándose con este sólo para “arrancarle” derechos. La fragilidad instituyente del movimiento luego de 2001 tiene como telón de fondo un movimiento de estas características².

Las coordenadas que vieron emerger al sector de la economía popular cambiarían significativamente en el proceso posterior a la crisis de 2001. Para empezar, decimos que fue el propio Estado el principal actor interesado, desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, de construirse identitariamente ubicando al neoliberalismo como “otro” para diferenciarse. Veremos, a continuación, cómo ese contexto político-ideológico permeó la subjetividad de nuestra población y el marco en el cual la agencia de sus organizaciones terminó por conformar una Confederación que la nuclea.

Nuevo actor: la CTEP

En primer lugar, interesa contextualizar a nivel macro el terreno político en el cual surgiría la CTEP. Registramos, a nivel discursivo, un trabajo del ejecutivo nacional por construirse desde un

² El “que se vayan todos” es la expresión metafórica más literal de aquella percepción tan diseminada.

lugar antagónico a un “otro” denominado como “neoliberal”: “(...) *los acuerdos acerca de los «derechos humanos» y el «consumo» constituyen, por decirlo así, los cimientos de toda la arquitectura argumentativa kirchnerista*” (Dagatti, 2014).

Para la construcción de una identidad que defiende los DDHH, la última dictadura cívico-militar fue asociada a su vulneración, mientras que en la defensa y el impulso del consumo, las desigualdades generadas por el menemismo fueron construidas como ese exterior constitutivo. De esta manera, lo neoliberal era asimilado con la vejación de derechos humanos y el empobrecimiento de la vida de la población argentina, por lo que el gobierno construía antagónicamente desde allí.

Coherentemente con esa identificación, el gobierno kirchnerista construiría lentamente una política macro-económica tendiente al fortalecimiento del mercado interno, proceso que inducía un “derrame a pequeña escala” (Martínez Santacroce, 2019), favoreciendo de manera indirecta la prosperidad de las iniciativas económicas de los sectores populares. El mejoramiento en las condiciones de vida de los sectores excluidos habilitaba, a su vez, la creciente organización en movimientos populares y organizaciones cooperativas o de desempleados/as, para coordinar redes de demanda frente al Estado. De esta manera, vemos cómo la política económico-social del gobierno fue central para el proceso en cuestión.

Sumado a esta construcción discursiva y macroeconómica (dos modos de pensar al neoliberalismo), podemos incorporar además un análisis de la gubernamentalidad kirchnerista en sentido foucaultiano, completando así la tríada trabajada. Desde esta perspectiva, reseñando una idea sobre la cual poco se ha estudiado y hay mucho por decir, encontramos en el gobierno kirchnerista un conjunto de políticas públicas orientadas por una racionalidad no-neoliberal (Sala, 2012). Esto quiere decir que la finalidad de dichas políticas no se basaba en la construcción de un dispositivo ambiental

“(...) que busca crear una sociedad sometida enteramente a la dinámica competitiva. (...) para ello es preciso construir una trama social en la que todas sus unidades básicas (la familia, las instituciones de la sociedad civil, el Estado, los individuos) adquieran la “forma empresa”” (Castro Gomez, 2010).

Por el contrario, el rol del Estado aparecía como la herramienta central para remendar las heridas producidas por el neoliberalismo: “(...) dentro del universo de sentido kirchnerista {el Estado} se presenta como lógica de articulación social distinta a la del mercado con un fuerte sentido reparador (...)” (Yabkowski, 2017). Antagonizando con la concepción pro-mercado heredada de los 90’, emergía una lectura según la cual “(...) el Estado debe recuperar un fuerte rol regulador, asumiendo protagonismo en el campo económico, para producir desarrollo y crecimiento” (Ibid. 2017). De esta manera, la eficacia de las medidas adoptadas debería evaluarse según indicadores distintos a los del corpus económico ortodoxo, ya que la finalidad era otra. Como señala Paulizzi, “(...) el Estado “protagónico” ejerce ciertas limitaciones al mercado recurriendo a elementos políticos y morales, que se articulan con la idea de justicia social, equidad y cohesión (...)” (Ibid. 2015).

La propia fisonomía de la Economía Popular durante la etapa kirchnerista, donde la mejora en el poder adquisitivo de los sectores populares es factor explicativo de ese movimiento, es deudora de políticas que muestran una racionalidad novedosa, distinta a la neoliberal. Y, sin embargo, la “forma empresa” como lógica nuclear de aquella racionalidad, logró colarse entre las hendidias de una política social que hacía del consumo su principal arma para diferenciarse del modelo previo. Veremos esto con más detalle al referirnos a la financiarización de la Economía Popular. Sin embargo, interesa remarcar dicha orientación no-neoliberal a nivel gubernamental como contexto habilitante de la creciente organización de este sector.

Aún reconociendo el desarrollo de un conjunto de políticas macro-económicas y de una gubernamentalidad no-neoliberales, ordenadas en un discurso anti-neoliberal, lo cierto es que la población que vivía de su propio trabajo por fuera del mercado laboral formal se mantuvo constante en la Argentina kirchnerista. Para peor: el crecimiento constante en las variables que determinaban la mejora en el poder adquisitivo de los sectores populares comenzaban a enfriarse hacia 2011. Tal es así que el discurso de “sintonía fina” del oficialismo trataba de acordar, entre empresarios, sindicatos y el Estado, una salida armónica de cara a un contexto de estancamiento, esto es: que la imposibilidad de compatibilizar crecientes ganancias de sectores concentrados con una mejora en el poder adquisitivo de los sectores populares (Hagman, 2014), algo que hasta 2011 era central en la política económica kirchnerista, sea sorteada en un “empate técnico” entre las partes. Este dato no pasaría desapercibido para la dirigencia de las organizaciones que darían nacimiento a la CTEP, en tanto había un reconocimiento oficial de que el crecimiento y la inclusión

entran en períodos de incertidumbre e inestabilidad. De este modo, identificamos a la CTEP como institución surgida al calor del ciclo kirchnerista, permeada por una tradición organizativa que data de mediados de los 90` y fuertemente atravesada por discursos político-ideológicos de una trayectoria de lucha, motivada por la defensa y la organización frente al Estado de un sector en mejores condiciones materiales que la precedente pero en vistas de un futuro regido por la incertidumbre.

Radiografía de la CTEP

Al nivel de la organización del sector, la CTEP inaugura un modo de construcción política que excede el binomio peronismo/autonomismo (Schuttenberg, 2011); como mencionamos anteriormente, las organizaciones que precedieron a la CTEP proponían una intervención dentro del Estado o por fuera de él y, a su vez, como disputa o resistencia al sistema desigual: es en este sentido que el primero está ligado al accionar de las organizaciones peronistas, y el segundo, a las autonomistas. Entonces, desde la emergencia de esta nueva organización se convida una propuesta integradora, aglutinante y homogénea (que por dentro está integrada por una particular heterogeneidad de organizaciones de diversas tradiciones políticas); la demanda gremial concreta engloba a otras demandas más particulares, pero sobretodo propone pensar las medidas que han sido históricamente a corto plazo (planes y subsidios) como un derecho laboral, esto es, una bandera por la cual movilizarse³. Como nos dice M. Tóffoli (2017: 43),

“Se da un cambio en las formas de intervención política, en la que la lectura del fin del ciclo de resistencia al neoliberalismo da pie a la renovación del vínculo con el régimen político y a pensar las prácticas militantes en nuevas instancias como la político-institucional, lo cual transforma los lugares y las formas de reclamo. Esto efectivamente reduce cierto potencial disruptivo de las acciones políticas previas, pero a su vez, pone a disposición de las organizaciones otras vías de participación así como nuevos recursos”

³ La CTEP propone entonces pensar el trabajo popular principalmente como trabajo digno, reconocido y legítimo. ¿Qué respuestas debe dar el Estado ante esto? Principalmente el reconocimiento, para legitimar y otorgar de esta manera, beneficios como cualquier/a trabajador/a legal: vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.

El novedoso objetivo para las organizaciones sociales es el trabajo popular. De esta manera, el sujeto de la economía popular aparece constituido, en los documentos de la organización, como parte de una realidad que tiene toda su potencialidad política: excede lo estrictamente laboral, se distingue de la relación patrón- obrero tradicional, se piensa como una nueva manera de ver el trabajo. Introduce un sentido emancipatorio que predica acerca de la “comunidad” y de los “objetivos sociales”, por fuera de la lógica mercantil y en función de una productividad de carácter “social” (Toffoli, 2017: 47). Desde su propia perspectiva, podemos pensar a la economía popular como un sector en construcción, ya que cualquier intento para definirlo deviene en un debate, aunque, de todas formas, existe un consenso: el sector está sostenidos sobre actividades laborales de carencias estructurales.

A partir de su creación, los referentes del sindicato tuvieron que comenzar a diagramar la estructura organizativa, el mensaje que pretende difundir, las reivindicaciones concretas, a quién representar, y principalmente su repertorio de acción colectiva. Este último estará compuesto por una amalgama de significados que dota a este proyecto de un esfuerzo militante anclado en el trabajo de base en los territorios y, en parte, en el repertorio de acción colectiva de la tradición piquetera reflejado principalmente en la intervención en el espacio público. En esta clave la CTEP propone obtener lo más útil de la experiencia sindical y lo más valioso de la acción piquetera (Natalucci, 2016).

Esta vocación sindical estará alimentada por las tradiciones de lucha de los sectores golpeados por el neoliberalismo⁴. De este modo vemos el vínculo y, al mismo tiempo, las diferencias entre una perspectiva desde la acción colectiva y otra discursiva a la hora de pensar continuidades y rupturas entre la población desempleada, la piquetera y la economía popular.

Relación entre el Estado y la CTEP

Es este el camino que evidencia, de alguna manera, el rol del Estado para la CTEP que, lejos de excluirlo en sus proyectos, lo ubica como el mayor responsable y pretende tener una relación directa, posicionándolo como uno de los garantes del mejoramiento de la situación de todos los trabajadores populares, situándolo como “el blanco” donde se dirigen todas las demandas: *“No tenemos patrón, trabajamos por cuenta propia, entonces nuestro patrón es el Estado, a él hay que*

⁴ Hemos intentado, en los primeros apartados de este documento, demostrar cuáles fueron estos sectores.

dirigir los reclamos” (Castro, 2017)⁵. Después del 2015 y con la llegada del nuevo gobierno, la relación institucional entre las partes se vuelve más cercana.

Ante un diagnóstico de exclusión de un tercio de la población, a pesar de los intentos transformadores llevados a cabo por el sector, estos no podían ubicarse dentro de las categorías de empleables o no empleables, pero tampoco inactivos ni desocupados: sujetos de derechos que no se encontraban dentro del circuito del mercado. Según Muñoz (2018: 107), “(...) *no se universalizaron ni las políticas sociales ni se propagó el empleo formal entre los sectores más empobrecidos. El objetivo era evitar que se desincentivara la búsqueda de empleo producto del acceso a la provisión de bienes y servicios vía ingresos públicos.*”

Con la llegada del gobierno de Cambiemos, debido al avance inflacionario y la caída del empleo, el contexto empeoró significativamente siendo este sector el más vulnerable. Lo curioso es que el gasto público se mantuvo constante respecto al gobierno kirchnerista, y se produjo un crecimiento de la transferencia hacia las organizaciones de la economía popular. Según el Ministerio de Hacienda de la Nación, para los años 2015 y 2016, el porcentaje del PBI destinado a gasto público se ubicó en 42,2%⁶.

Como nos explican algunos estudiosos de la acción colectiva (Mc Adam, Mc Carthy y Zard, 1999), la lucha que se genera entre un grupo que se conforma y el Estado, el papel desempeñado por los medios de comunicación y, por último, el impacto cultural que el movimiento puede tener al modificar elementos culturales, son aristas que permiten abordar el análisis de la construcción de la acción colectiva. Por ejemplo, la consigna de las “tres T” (Tierra, Techo y Trabajo) fue modificada por “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, y se convirtió en una consigna política que en su conjunto conforma una reivindicación contenedora de múltiples reclamos particulares. La puesta en escena de la organización en las calles ha sido acompañada por símbolos que representan el universo de lo “popular” que buscan interpelar.

La ley de emergencia social, la ley provincial de Economía Popular, la ley de integración urbana, el Re.Na.Ba.P, entre otros, definieron ciertos lineamientos discursivos que estructuraron los argumentos que la organización necesita y necesitó para la disputa de sus reivindicaciones ante el Estado. Aquel reclamo que impactó y tuvo peso específico fue el que contenía en una consigna un

⁵ Discurso de Esteban Castro en la UNVM en el marco de un conferencia denominada “Economía Popular y movimientos sociales” en agosto del 2016. Fuente propia por observación y registro.

⁶Consultado en Presupuesto Abierto del Ministerio de Hacienda. <https://www.presupuestoabierto.gov.ar>

pliego de reivindicaciones concretas. Esta capacidad de producir un tipo de discurso que, sin demasiadas complejidades, explica el universo de demandas, permitió a la CTEP acrecentar en pocos años la correlación de fuerzas, que se reflejó en la inclusión de organizaciones diversas a su proyecto político.

El vínculo entre la Confederación y el Estado no se reduce solo a nivel nacional. Las provincias de La Rioja y Córdoba por ejemplo, tuvieron avances concretos ante una lectura política más local de las organizaciones. El recorrido en algunas provincias fue más accesible para el sector, dando lugar a ciertos escenarios de negociación y transferencia de fondos dirigidos a los proyectos comunitarios y cooperativos fundamentalmente de la CTEP.

El caso de La Rioja es uno de los más representativos, ya que la creación de proyectos bajo la Secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria, supuso el crecimiento del sector mediante una relación directa con el Estado, dando un paso adelante en la institucionalidad del sector. Con la apertura de créditos y microcréditos y la aplicación de recursos para capacitación de unidades productivas, el gobernador institucionaliza al sector de la Economía Popular (Roig, 2019). Por otra parte, en Córdoba, a finales del año 2017 y principios del 2018, se da por primera vez como sector organizado (CTEP + CCC + Barrios de Pie + FOB + FPDS⁷) una serie de movilizaciones que tienen un reclamo particular para la coyuntura en la provincia desprendido de una necesidad construida al calor del crecimiento organizativo y del aumento en la correlación de fuerzas. La campaña por la “ley provincial de Economía Popular” exigió un pliego de reivindicaciones al Estado, con el objetivo de crear un Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular, que entre otras cosas, incluye un registro de todos los trabajadores y trabajadoras del sector en la provincia y además, la obligación de compra del 20% de las producciones de las unidades productivas. Dicha campaña fomentó la institucionalización, proponiendo un abordaje integral a la demandas de las organizaciones que defienden al trabajo de este sector.

Las oportunidades políticas que se han dado en estos años en sintonía con el crecimiento de la estructura de movilización, generaron las condiciones para la institucionalización de la economía popular a nivel local⁸. La ley provincial de Economía Popular responde a la necesidad de cuantificar y registrar todos los trabajadores/as populares de la provincia, y a la hora de tratar el

⁷ Organizaciones sociales por sus siglas: Corriente Clasista y Combativa (CCC); Frente de Organizaciones de Base (FOB) y Frente Popular Darío Santillán (FPDS)

⁸ Varios de los proyectos lanzados hacia el gobierno cordobés tienen que ver con el acercamiento directo que tiene el Movimiento Evita con referencias políticas dentro de los ministerios.

proyecto no se requirió de mucha confrontación en las calles, sino la capacidad de diálogo que tuvo la CTEP con los representantes del Estado. Asimismo, creemos que se sostiene un grado de desconfianza hacia los gobernantes, que perdura en el imaginario de los dirigentes de la CTEP, pero esto no encontró asidero, por el momento, en la construcción política en conjunto, con una organización que forma parte del gremio y del gobierno a la vez, evitando el conflicto interno, como es el caso del Movimiento Evita.

La Economía Popular se edifica: identidades en juego

Un abordaje de la subjetividad popular en este ciclo no puede ignorar la trayectoria del sujeto, pero tampoco un contexto en el que el consumo ocupaba un lugar central a nivel discursivo y como tecnología de gobierno. Para analizar este vínculo entre institucionalidad e identidad, encontramos útil la incorporación de categorías foucaultianas para caracterizar las consecuencias de un proceso desatado desde el Estado: la proliferación de zonas atractivas para el capital redundó en el aumento de esferas de lo social regidas por una lógica mercantil, allí donde no existían mediaciones que alteren el sentido de las prácticas en cuestión.

Por su parte, el vínculo establecido entre la población estudiada y los gobiernos supuso una reconfiguración constante de la identidad del movimiento: sectores vinculados al capital lograron adaptar su oferta a un mercado antes marginal para sus intereses, debido al creciente volumen de liquidez circulante en los sectores populares. De esta manera, registramos una paradoja que será nodal para una caracterización, por ejemplo, del kirchnerismo como fenómeno fundamentalmente ambiguo. Nos referimos a la paradoja de un gobierno que desarrolla un conjunto de políticas para favorecer el consumo de sectores populares y que, a consecuencia del éxito de dicha intervención, genera las condiciones para que sectores del capital logren filtrarse y captar parte del excedente generado.

Dicha paradoja es fácil de identificar si observamos la dinámica de sectores vinculados a las “bajas-finanzas” (Gago, 2013). Decimos así que la expansión del consumo, variable que explica una mejora cualitativa en las condiciones de vida de los sectores populares en el período kirchnerista, trajo aparejada, al mismo tiempo, la penetración de la lógica financiera a baja escala. La misma lógica que durante las últimas décadas adoptó la economía global como método más eficiente para la acumulación, ingresaba en la “pragmática popular” apuntalando el consumo: “(...) queda claro que estas economías antes visualizadas como insignificantes y meramente

subsidiarias, se convirtieron en territorios dinámicos y atractivos para el capital (...)” (Gago, 2014).

Son consecuencias novedosas de reformas estructurales ya ocurridas en la formación social argentina, en contextos de mayor exclusión. Un informe de 2013 del Ministerio Público de Argentina (PROCELAC, 2013) refleja no solo la penetración de las finanzas en la economía popular, sino también sus efectos: “(...) *lejos de tener un carácter integrador o democratizador, reprodujeron las diferencias sociales que operan en otros ámbitos de la sociedad*” (Ibid. 2013).

Como vimos con Laclau, si la disputa hegemónica responde a la tarea por volver la más verosímil de las explicaciones a una interpretación particular de los hechos, cabría preguntarnos: ¿Cómo vivenció un/a trabajador/a de la economía popular el aumento de su capacidad de consumo durante la etapa kirchnerista? Si una parte, para nada despreciable, del consumo cotidiano era realizada vía endeudamiento: ¿Cómo explica el/la trabajador/a su situación económica?

Entendemos que, bajo la lógica financiera que penetraba fuertemente en la pragmática diaria de los sectores populares, subyace la posibilidad de una identificación individualista del consumidor en el mercado, que desarrolla estrategias particulares para desenvolverse de manera eficiente. De alguna manera esta identificación tiende a desplazar al Estado como institución responsable de generar las condiciones para el desarrollo económico de la multitud, para reubicar al individuo como principio explicativo fundamental de su situación económica. Si la marginación del circuito de consumo se suscitaba en un contexto de identificación culpógena de la población desocupada a principios de los 90’, interesa remarcar cómo su dinamización en el ciclo posterior redundaba en una interpretación nuevamente individualista de la situación económica.

Asistimos así a un proceso peculiar en la lógica hegemónica. Un gobierno que desarrolla políticas redistributivas contrarias al manual clásico del neoliberalismo y que, sin embargo, genera consecuencias sobre las cuales el capital financiero demuestra capacidad de adaptación. Paradójicamente, no solo se adapta para incrementar sus ingresos sino que, al mismo tiempo, sus efectos subjetivos replican en un reforzamiento de principios individualistas en la explicación que los sectores populares hacen de su situación económica.

En esta operación no solamente vemos la diferencia entre una política neoliberal —en su acepción vinculada a la macroeconomía—, una gubernamentalidad neoliberal y el concepto de neoliberalismo como discurso, sino que además podemos apreciar la centralidad de la disputa hegemónica en los procesos de redistribución de la riqueza. La interpretación que los sujetos hacen

de su situación económica no decanta de manera unívoca de las políticas que efectivamente un gobierno desarrolle, por más ostensible que sea el beneficio de un determinado sector incluso en términos estrictamente económicos. Existen discursos subyacentes que, a modo de ordenadores, vuelven a ciertas explicaciones más verosímiles que otras. Por ello, decimos que la financiarización de la economía popular, en el ciclo kirchnerista, operó en un sentido favorable a una explicación neoliberal de la situación de las/os trabajadoras/es en la economía.

Algunas reflexiones finales

Desde un punto de vista cualitativo, la multiplicación de pequeñas iniciativas, organizaciones y experiencias económicas populares está relacionada con la movilización y activación económica del mundo de los sujetos que se representan a sí mismos como no integrados al mercado formal y que se encuentran en constante búsqueda de solución autónoma a sus propias necesidades y carencias. Y este fenómeno tiene por principal exigencia por parte de las organizaciones, el interés de los gobiernos a la hora de diseñar e implementar políticas públicas y subsidiarias dirigidas al sector.

La crítica estructural al sistema que realizan las organizaciones que componen la CTEP es un consenso: se puso foco más en lo que se puede obtener en el sistema en que se vive, que en intentar cambiarlo. El piso de acuerdos es una plataforma fértil para proyectos comunitarios, autogestivos, solidarios, sociales, cooperativistas, etc. basadas en crear las condiciones necesarias con ayuda del Estado para que estos emprendimientos populares sean un sostén económico para los hogares.

En la ardua tarea de clasificar este mundo de trabajadores, la CTEP utiliza el territorio como línea que distingue entre lo que es y no es popular (relativo a la categoría pueblo). Lo que genera la diferencia entre un ellos y un nosotros es, según la CTEP, el lugar que ocupa la/el trabajadora/or en el sistema de mercado, es decir, la idea de que el sujeto que organiza es el trabajador/a que ni el Estado ni la sociedad logran ver. En este sentido decimos que la CTEP no pretende representar a todos y todas quienes trabajan por cuenta propia, sino además supone vivir en un territorio excluido, apartado y segregado. El eje reivindicativo no está puesto en el desocupada/o, sino en la falta de derechos de la/él “ocupada/o”. Esto es un cambio sustancial que permite ampliar el marco desde la reconfiguración de una identidad social que genera el problema del trabajo.

La CTEP por lo tanto, debe estar comprometida en la política de la significación, esto es, en la construcción de sentido en competencia con otros actores políticos, de cierta manera, en la capacidad de politizar la realidad. Dichas tareas constan, en palabras de Gerhards (1995)

“(...) encontrar un tema de debate público e insertarlo como un problema social; localizar las causas y los agentes causales del problema; interpretar los objetivos y la probabilidad de éxito de estos; encontrar y caracterizar al destinatario de la protesta; y justificarse como actores legítimos de la protesta.”

Necesariamente el movimiento necesita de este trabajo militante minucioso y cotidiano para que el motor de la acción colectiva se mantenga con cierto grado necesario de cohesión interna sostenido sobre una base de acuerdos reivindicativos.

La vocación por superar las limitaciones del ciclo popular inaugurado con el siglo XXI en América Latina, encuentra en el abordaje de la economía popular una importancia insoslayable. Y su potencia radica no solamente en repensar estrategias de inclusión que no cimienten el terreno para que filtren discursos neoliberales, donde la contracción del consumo pone en jaque el desarrollo de un conjunto de políticas socio-culturales antagónicas al modelo individualizante hegemónico, sino fundamentalmente debido a que ese primer objetivo obliga a discutir y acordar un modelo civilizatorio paralelo. No se puede planificar una política social antagónica al neoliberalismo sin llenar de contenido un horizonte distinto que oriente las mediaciones entre el Estado y los trabajadores/as de la economía popular, que necesitan ser revisadas para no repetir errores del pasado. De otro modo: ¿cómo generar los anticuerpos necesarios para evitar la reproducción de la lógica mercantil en un proceso de inclusión de grandes mayorías, sin incorporar una lógica diferente que ordene la nueva gubernamentalidad?

La forma de encarar nuestro abordaje admite escapar de una lógica estrictamente institucionalista, para incorporar otros elementos a la hora de pensar la disputa del poder y las articulaciones que, de manera contingente, estabilizan prácticas, saberes y sentidos. A modo de ejemplo: en nuestro trabajo pudimos ver cómo la potencia destituyente que reconocimos en el movimiento piquetero hacia finales de la década de 1990, como actor con capacidad para resquebrajar el discurso oficial, radicaba en su capacidad para mostrarse a sí mismo como la exclusión sobre la cual descansaba la estabilidad neoliberal. La centralidad que adquiere la “inclusión social” en el proceso post-2003 es

sintomática de la potencia de aquél reclamo, a partir de la presencia de la desigualdad como ordenador de la política nacional hacia adelante. Allí, vemos las implicancias de acontecimientos que exceden o sobrepasan los límites de un análisis tradicionalmente institucionalista.

Por último, la coyuntura actual está caracterizada por un momento de recesión, que se refleja en problemas para conseguir trabajo de al menos dos millones de trabajadoras/es (Natalucci, 2016). Sumado a una reducción del consumo interno y caída del salario real, exponiendo a problemas a cualquier emprendimiento que de economía popular se trate. Y además existe una disminución de programas sociales que fomenten la empleabilidad de los sectores más vulnerables, como mencionamos a lo largo de este trabajo (esto no quiere decir que haya habido una disminución del gasto social). Estas tres claves, sumado a la inflación constante, agravada desde la llegada del nuevo gobierno, ponen en una delicada situación particularmente al sector de la Economía Popular; es aquí la ardua tarea de las organizaciones que lo representan, específicamente la CTEP. Por ende, proponemos en este texto abordajes diversos para problematizar una situación particular: la capacidad que tendrá de ahora en adelante dichas organizaciones para llevar a cabo un proceso de resignificación e integración ante un gobierno que no ha demostrado esfuerzos suficientes para colaborar en este sentido. Es así que la institucionalización del sector dependerá de las estrategias políticas para lograr una articulación entre este y el Estado, siendo a su vez los principales opositores, ante dicha coyuntura.

Si la economía popular como fenómeno resulta interesante para mostrar la etapa kirchnerista en su ambigüedad, analizar la forma que adopta bajo la nueva gubernamentalidad del gobierno macrista es una tarea urgente para re-pensar el modo en que su institucionalización puede favorecer herramientas para el fortalecimiento del sector.

Bibliografía

- CASTRO GOMEZ, S. (2010). *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- CERRUTTI, M. (2003). *Utexas*. Obtenido de <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/cerrutti.pdf>
- DAGATTI, M. (2014). *Felsemiotica*. Obtenido de <http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Dagatti-Mariano-Contribuciones-para-una-cartograf%C3%ADa-discursiva-del-primer-kirchnerismo.pdf>
- DAIN, A. (2011). Ontología de la sobredeterminación. En *Ontología políticas*. Buenos Aires: Imago.
- FRIDMAN, D. (2008). *apuntesceyp.com.ar*. Obtenido de <http://www.apuntesceyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/124/109>
- GAGO, V. (2013). *Lobo suelto*. Obtenido de <http://anarquiacoronada.blogspot.com/2013/11/el-consumo-popular-como-marca-de-epoca.html>
- GAGO, V. (2014). *La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- GERHARDS, J. (1995). *Dimensiones de encuadre y estrategias de encuadre*. En A. Rivas. *Análisis de marcos. Una metodología para el estudio de los movimientos sociales*. Madrid: Trota. Pp. 181-215.
- HAGMAN, I. (2014). *La Argentina kirchnerista en tres etapas*. Buenos Aires: CAMBIO.
- JOZAMI, E. (1985). *Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- LACLAU, E. (1986). ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política? En E. Laclau. Obtenido de <http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/37%20-%20Laclau%20-%20Por%20qu%C3%A9%20los%20significantes%20vac%C3%ADos%20son%20importantes%20para%20la%20politica..pdf>
- LACLAU, E. (2000). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- LACLAU, E. y. (2006). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: FCE.
- LONGA, F. (2018). ¿Tirando viejos por la ventana? Militancia juvenil y gestión estatal en el Movimiento Evita de Argentina (2005-2015). *Ánfora*, 197-218.
- MC ADAM, D.; MC CARTHY, J. Y ZARD, M. (1999). *Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores. Hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales*. En D. McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds.). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo. Pp. 21-46.
- MUÑOZ, M.A. (2018). *Las marcas de los sujetos en el Estado. Los trabajadores de la economía popular y las políticas públicas en la Argentina reciente*. N° 30. Pp. 85–128. Santa Fe, Argentina: UNL.

- NATALUCCI, A. (2011). Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales en Argentina 2001-2010. *Open edition*, sn.
- NATALUCCI, A. (2016). Del piquete a la Economía Popular. Revista Anfibia, UNSM. Extraído el 25/10/2016, de <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/del-piquete-a-la-economia-popular/>.
- PROCELAC. (2013). *Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares*. MPF.
- REYNARES, J. M. (2014). *El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003*. Córdoba: CEA.
- ROIG, A. (2015). Financiarización y derechos de los trabajadores de la economía popular. *Desigualdad y democracia*, sn.
- ROIG, A. (18 de junio del 2019). *Una institucionalidad para la economía popular*. Pagina/12. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/200984-una-institucionalidad-para-la-economia-popular>
- SCHUTTENBERG, M. (2011). La reconfiguración de las identidades "nacional populares". Los puentes discursivos para la inserción de tres tradiciones políticas en el espacio "transversal kirchnerista". En *Sociohistórica* (N.º28). Pp 41-73. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5168/pr.5168.pdf
- TÓFFOLI, M. (2017). La "CGT de los excluidos". La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) (2011-2016). Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1402/te.1402.pdf>